



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN PENAL

Magistrado ponente: RAFAEL ENRIQUE LÓPEZ GÉLIZ

Radicación	110013109060202600112 01 (161.26)
Accionante (s)	Cesar Camilo Peñaranda Barrera
Accionado (a) (s)	Fiscalía General de la Nación y la Unión Temporal Convocatoria FGN 2024
Aprobación	Acta nro. 67
Decisión	Confirma
Fecha	8 de mayo de 2026

1. ASUNTO

Esta Corporación resuelve la impugnación interpuesta por Cesar Camilo Peñaranda Barrera, contra el fallo de tutela emitido por el Juzgado 60 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá el 12 de marzo de 2026.

2. HECHOS Y PRETENSIONES

César Camilo Peñaranda Barrera manifestó que participó y aprobó el concurso de méritos FGN 2024 para proveer el cargo identificado con la OPECE No. I-202-M-01-(250), correspondiente a Asistente Fiscal III. Indicó que, mediante la Resolución No. 0015 del 26 de febrero de 2026, se publicó la lista de elegibles, en la cual ocupó el puesto 174.

Señaló que en la valoración de antecedentes no se le asignó puntaje adicional por su título de abogado, al considerarse que este ya había sido tenido en cuenta para acreditar los requisitos mínimos del empleo. Explicó que, amparado en el principio de confianza legítima, no presentó reclamación en esa etapa. No obstante, advirtió que otros jueces constitucionales ordenaron una nueva valoración de

antecedentes en casos similares, reconociendo el título de abogado como educación formal adicional. Por ello, presentó una solicitud para que se revisara su valoración de antecedentes y se recalculara su puntaje, pero esta fue negada.

Con fundamento en lo anterior, estimó vulnerados sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, la igualdad, el mérito y la confianza legítima. En consecuencia, solicitó que se ordenara a las entidades accionadas efectuar una nueva valoración de sus antecedentes, modificar el puntaje total obtenido y actualizar su ubicación en la lista de elegibles.

3. DEL FALLO IMPUGNADO

Mediante fallo del 25 de marzo de 2026, el Juzgado 60 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá declaró improcedente la tutela, al considerar que el actor no reclamó oportunamente contra la valoración de antecedentes y que, al existir lista de elegibles en firme, contaba con los medios ordinarios ante la jurisdicción contencioso administrativa, sin que el derecho de petición posterior reviviera etapas precluidas. Agregó que las decisiones favorables a otros concursantes no eran automáticamente aplicables a este caso y que no se acreditó un perjuicio irremediable.

4. LA IMPUGNACIÓN

César Camilo Peñaranda Barrera, inconforme con la decisión de primer grado, solicitó su revocatoria al sostener que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no le brinda una protección oportuna, lo que configura un perjuicio irremediable, pues la indebida asignación de puntaje puede consolidar el nombramiento de terceros. Señaló, además, que su título de abogado no fue valorado como formación adicional, pese a acreditar una cualificación superior al requisito mínimo exigido para el cargo. Agregó que la falta de reclamación en la etapa correspondiente obedeció a una interpretación razonable del Acuerdo 001 de 2025, amparada en el principio de confianza legítima,

máxime cuando existían decisiones favorables a otros aspirantes en la misma situación, por lo que exigirle dicho trámite previo constituía un exceso ritual manifiesto.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1 Competencia

De acuerdo con el artículo 86 Superior y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, es competente este Tribunal para resolver la impugnación interpuesta al ser superior funcional del juzgado de primera instancia.

5.2 Del mecanismo idóneo de protección de derechos constitucionales fundamentales

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede, mediante la acción de tutela, reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o particular, a condición de que no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

5.3 Problema jurídico

Establecer si la primera instancia acertó al declarar improcedente la protección constitucional solicitada por Cesar Camilo Peñaranda Barrera.

5.4 Caso concreto

Verificado el expediente, se advierte que César Camilo Peñaranda Barrera participó y aprobó el concurso de méritos FGN 2024 para el cargo de Asistente Fiscal III, OPECE No. I-202-M-01-(250), y ocupó el

puesto 174 en la lista de elegibles publicada mediante Resolución No. 0015 del 26 de febrero de 2026. Alegó que en la valoración de antecedentes no se le asignó puntaje adicional por su título de abogado, al haberse tenido en cuenta como requisito mínimo del empleo, por lo que, amparado en la confianza legítima, no reclamó en esa etapa; sin embargo, al conocer decisiones favorables en casos similares, solicitó la revisión de su puntaje, petición que fue negada. Por ello, acudió a la tutela para pedir la modificación de su calificación y la actualización de su posición en la lista de elegibles.

Por su parte, la Unión Temporal Convocatoria FGN 2024 señaló que, aunque el actor avanzó hasta la etapa de valoración de antecedentes, no presentó reclamación dentro del término habilitado en SIDCA3, por lo que dejó precluir la oportunidad para controvertir su puntaje. Añadió que, al existir una lista de elegibles en firme, cualquier inconformidad debía plantearse ante la autoridad judicial competente.

Para esta Sala de Decisión, la actuación de las entidades accionadas, consistente en abstenerse de reconocer el título de abogado como puntaje adicional para efectos de acreditar educación formal a favor del señor Peñaranda Barrera, no plantea un asunto de relevancia constitucional, sino una controversia de naturaleza legal que debe ventilarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Así lo ha precisado la Corte Constitucional en la Sentencia SU-067 de 2022 y el Consejo de Estado en providencia del 5 de noviembre de 2020, al señalar que solo los actos administrativos que ponen fin a un procedimiento, impiden su continuación o deciden de fondo el asunto, son susceptibles de control judicial conforme al artículo 43 del CPACA, y que en los concursos de méritos, si bien los actos expedidos durante el trámite suelen ser preparatorios o de trámite, como lo precisó el actor a través de su apoderado, pueden adquirir carácter definitivo cuando afectan de manera directa la situación jurídica del aspirante.

En consecuencia, el mecanismo idóneo y eficaz para controvertir la decisión de no valorar el título profesional del actor dentro del concurso de méritos, una vez conformada la lista de elegibles mediante la Resolución No. 0015 del 26 de febrero de 2026, es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En ese escenario podrá analizarse si la interpretación que el actor hizo del Acuerdo 001 de 2025, con fundamento en el principio de confianza legítima, lo eximía de presentar reclamación oportuna ante la entidad y si ello constituyó un exceso de ritualidad manifiesta, así como si, en garantía del principio de igualdad, resultaban aplicables los precedentes judiciales que, según afirma, reconocieron a otros aspirantes la valoración del título para los efectos pretendidos.

Incluso, puede solicitar medidas cautelares conforme al artículo 230 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de preservar o restablecer la situación jurídica del interesado y, de ser necesario, suspender provisionalmente los efectos derivados de la lista de elegibles, incluidos los eventuales nombramientos. Por ello, dicho medio sí resulta idóneo para frenar oportunamente los efectos del acto que se considera irregular.

Por otro lado, la decisión de la Unión Temporal Convocatoria FGN 2024, consistente en abstenerse de reconsiderar que el documento aportado para acreditar los requisitos mínimos también fuera valorado en otros ítems del concurso, no resulta vulneradora de sus derechos. El actor dejó precluir la oportunidad para presentar reclamación ante la entidad, sin que posteriores peticiones como la registrada el 9 marzo de 2026 puedan revivir etapas ya fenecidas. De ahí que la procedencia o no de sus argumentos deba debatirse a través de los medios de control judicial previstos para ese efecto.

En ese sentido, aunque César Camilo Peñaranda Barrera insiste en que se revise la valoración de su título profesional, no se advierte un fundamento constitucional que habilite la intervención del juez de tutela para impartir una orden en tal sentido. En efecto, este mecanismo está previsto para la protección inmediata de derechos

fundamentales cuando no exista otro medio de defensa judicial idóneo o cuando sea necesario evitar un perjuicio irremediable, supuesto que no se configura en el presente asunto, pues no se acreditó, siquiera sumariamente, que la disminución del puntaje en el factor de educación formal hubiera generado una afectación real e inminente de sus derechos fundamentales.

En conclusión, esta Sala encuentra acertada la decisión de primera instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala de Decisión de Acción de Tutela, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

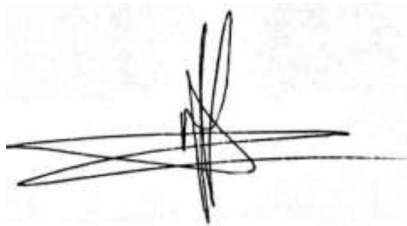
RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la decisión emitida el 12 de marzo de 2026 por el Juzgado 60 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

SEGUNDO. Contra la presente decisión no proceden recursos.

TERCERO: REMÍTANSE las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAFAEL ENRIQUE LÓPEZ GÉLIZ
Magistrado



MARCELA MÁRQUEZ RODRÍGUEZ
Magistrada



YANET LILIANA MARTÍNEZ PALMA
Magistrada